

En busca de asilo durante el primer año del gobierno Biden: la crueldad y el caos persisten

Personas solicitantes de asilo, sus defensores, y aliados, tenían grandes esperanzas cuando el presidente Biden asumió el cargo hace un año, en gran parte porque [prometió](#) poner fin a las desastrosas políticas de asilo del gobierno Trump y humanizar el sistema migratorio de EE. UU. Con esta esperanza, el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas en inglés) diseñó una hoja de ruta con las [prioridades](#) que el nuevo gobierno debía asumir para empezar a reconstruir nuestro sistema de asilo.

Pero al reflexionar sobre el último año, el panorama para personas solicitantes de asilo es mucho más sombrío de lo que esperábamos. Una y otra vez, el equipo de Joe Biden ha continuado aferrándose a las políticas y prácticas de Trump. Las siguientes cuatro áreas ilustran las decepciones del último año, el poco progreso alcanzado, y lo mucho que el gobierno se ha alejado de sus promesas originales.

Aumento de expulsiones en masa bajo el Título 42

A más de un año del cambio de gobierno, la vergonzosa e inaceptable realidad es que la frontera entre Estados Unidos y México continúa cerrada para la gran mayoría de personas solicitantes de asilo o protecciones complementarias. Bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19, el equipo del presidente Biden continúa expulsando a personas que buscan asilo, recurriendo a una oscura provisión legal denominada "Título 42", en vez de aplicar nuestras leyes de asilo y medidas de salud pública sensatas. El presidente Biden ha asumido las expulsiones del Título 42 como una política propia a pesar de las objeciones de más de [60 miembros del Congreso](#), [expertos en salud pública](#) (incluyendo [ex oficiales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades](#)), la [Agencia de la ONU para los Refugiados](#) (ACNUR), y [ex funcionarios de alto rango](#) de la misma administración Biden.

Desde su origen, expertos en políticas públicas en los campos de salud y migración han reconocido que las expulsiones del Título 42 son una táctica diseñada para castigar a quienes buscan asilo, y no una medida para proteger al público. Desde noviembre de 2021, el gobierno ha permitido que turistas y otras personas que visitan Estados Unidos con fines no esenciales ingresen al país por la frontera sur sin impedimentos. Aun así, las personas que se acercan a la frontera para pedir asilo – aun si están vacunadas o tienen una prueba de COVID negativa – son expulsadas de regreso a México, donde la violencia en contra de la población migrante sigue en [aumento](#), o retornados a los mismos países de los que escaparon, tales como [Brasil](#), [Guatemala](#), y [Honduras](#), entre otros.

El gobierno Biden ha excluido a los niños, niñas y adolescentes no acompañados de las expulsiones del Título 42, aunque los puertos de entrada siguen cerrados para ellos. Esto ha causado la separación de muchas familias desesperadas que se ven forzadas a decidir entre enviar a sus hijos solos al otro lado de la frontera, o permanecer juntos en el norte de México bajo condiciones peligrosas.

La cruel gestión de la administración Biden en la frontera ha tenido consecuencias devastadoras, particularmente para migrantes afrodescendientes. Las imágenes de agentes fronterizos montados en caballos mientras agredían brutalmente a familias haitianas provocaron indignación nacional en septiembre de 2021. Sin embargo, las [mortales expulsiones persisten](#). Desde septiembre, Estados Unidos ha expulsado a más de 16,000 mil haitianos, incluyendo niños y niñas.

Luego de una pausa en el litigio del caso Huisha-Huisha vs Mayorkas, y ante la insistencia del gobierno en continuar aplicando el Título 42, CGRS y organizaciones aliadas [continuaron la demanda](#) en contra el gobierno por la expulsión de familias solicitantes de asilo.

Fracaso en poner fin a “Quédate en México”

El que el gobierno Biden haya fracasado en terminar otra de las políticas fronterizas de su antecesor – el programa conocido como “Quédate en México” – demuestra la profunda resistencia al progreso por parte de fuerzas antiinmigrantes y la falta de compromiso por parte de funcionarios claves dentro del gobierno.

Esta política fue instituida originalmente en enero de 2019 por el gobierno Trump para obligar a las personas solicitantes de asilo a regresar a México y esperar allí mientras sus casos avanzaban en las cortes de inmigración dentro de Estados Unidos. Al asumir el cargo, el presidente Biden hizo lo correcto y suspendió “Quédate en México”. Seguidamente, empezó a permitir el ingreso de personas inscritas en el programa que aún estaban esperando tener sus audiencias en las cortes de inmigración. No obstante, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional terminara formalmente el programa en junio de 2021, los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda y obtuvieron una orden judicial en la que se dirigió al gobierno a realizar esfuerzos de buena fe para reiniciar Quédate en México, decisión que lamentablemente fue confirmada por cortes superiores. Como lo explicó CGRS en el [amicus curiae](#) presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la decisión que ordena reiniciar Quédate en México carece de sustento legal y fáctico.

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional eventualmente emitió un segundo memorando para terminar Quédate en México, la orden judicial se mantiene vigente y la administración Biden reinició el programa en diciembre de 2021. Sorprendentemente, y excediendo lo ordenado por la corte, el gobierno Biden decidió expandir la aplicación de Quédate en México para abarcar a personas con nacionalidades que no fueron incluidas en la primera versión del programa. Durante el gobierno Trump, CGRS presentó varias demandas en contra de esta política. Ahora bajo Biden, continuamos monitoreando la implementación del programa e incidiendo para su terminación definitiva

Cooperación en esfuerzos para impedir el acceso a la frontera y protección en Estados Unidos

En febrero de 2021, el presidente emitió una orden ejecutiva en la que dirigió a su administración a crear e implementar una estrategia migratoria, en coordinación con gobiernos regionales, para fortalecer los sistemas de protección en la región y expandir las vías de migración regular. En julio de 2021, el gobierno publicó su [Estrategia para la Gestión Colaborativa de la Migración](#), la cual promete promover la migración “segura, ordenada, y humana” en Centro y Norteamérica.

Si bien el gobierno Biden ha tomado algunos pasos para aumentar el acceso a protección desde Centroamérica, como el [restablecimiento](#) del Programa de Menores Centroamericanos (o CAM, por sus siglas en inglés), la triste realidad es que a la fecha el gobierno continúa prefiriendo políticas que le dan la espalda a las personas refugiadas. Más y más, el gobierno Biden ha recurrido a prácticas que externalizan la frontera de EE. UU., buscan trasladar a otros países nuestras obligaciones en materia de asilo, y evitan que las personas que buscan protección se acerquen a nuestra frontera.

Además de acelerar las expulsiones y retornos con políticas como el Título 42 y Quédate en México, la administración Biden ha presionado a gobiernos en la región, como los de [México](#) y [Guatemala](#), para que aumenten el control migratorio en sus territorios. Durante el 2021, el aumento del control migratorio en

México resultó en violencia, [abusos](#), y en la [violación](#) masiva de derechos los migrantes y refugiados transitando por México o buscando refugio en dicho país. Adicionalmente, durante el 2021, el gobierno Estados Unidos también [cooperó](#) con México para expulsar a personas Centroamericanas desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur de México, muchas de las cuales a su vez fueron expulsadas desde allí hacia Guatemala. Si bien estas expulsiones hacia el sur de México no persisten en la actualidad, en enero de 2022 el gobierno de Biden inició la expulsión de venezolanos hacia Colombia, otra muestra de la cooperación con terceros países para evitar el acceso al territorio y protección en Estados Unidos.

Una mejora en el panorama para las sobrevivientes de violencia doméstica

Como candidato, el presidente Biden específicamente prometió revertir una devastadora decisión emitida por funcionarios del gobierno Trump en el caso conocido como Asunto de A-B-, la cual acabó casi que por completo con el acceso al asilo para sobrevivientes de violencia doméstica o del crimen organizado. En junio de 2021, el fiscal general Merrick Garland [concedió](#) la solicitud de CGRS y anuló Asunto de A-B-, eliminándola así del ordenamiento jurídico y removiendo una barrera prácticamente insuperable para las sobrevivientes de violencia doméstica que buscan protección en este país. Esta victoria fue celebrada por la amplia coalición de personas que unieron esfuerzos para alcanzarla, incluyendo – por supuesto – a la [Sra. A.B.](#), la valiente mujer centroamericana que estuvo al centro del caso.

Notablemente, el gobierno sabe bien que la interpretación de la ley de asilo que se aplica en Estados Unidos – aun antes de Asunto de A-B- – no cumple con estándares internacionales, y se han comprometido a tomar medidas para remediar esto. En febrero de 2021, el presidente emitió una orden ejecutiva en la que ordenó a los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia a emitir regulaciones para clarificar la “pertenencia a un determinado grupo social” y otros asuntos legales que se han sido tergiversados a lo largo de los años por fuerzas que buscan limitar el acceso a protección en Estados Unidos. CGRS ha presentado sus recomendaciones y espera la publicación de las regulaciones lo antes posible. Dicha publicación se ha visto retrasada por más de tres meses, lo cual es preocupante teniendo en cuenta los [reportes](#) sobre esfuerzos dentro del mismo gobierno para prevenir que nuestras normas de asilo y refugio se ajusten a los estándares internacionales.

Exigimos un cambio de curso en el 2022

Esperábamos mucho más del gobierno Biden durante su primer año. Ha sido desalentador ver la manera como se han redoblado esfuerzos para para reafirmar, en vez de dismantelar, algunas de las más crueles e inhumanas políticas que fueron instituidas originalmente por el gobierno Trump. No obstante, continuaremos luchando de la mano de personas solicitantes de asilo y refugiadas, y organizaciones aliadas, para ver cambios positivos en el 2022. Ya es hora de que el gobierno de Estados Unidos honre sus promesas y acoja políticas fundamentadas en principios de humanidad, justicia, y respeto por el estado de derecho, en vez de ceder ante temores políticos y narrativas cargadas de xenofobia y racismo.

2 de febrero de 2022

En este enlace puede encontrar actualizaciones y otra información en español sobre políticas de asilo en Estados Unidos y política migratoria regional: bit.ly/3dQaBuW